

# Análisis de REDD+

## Retos y opciones

Editor Arild Angelsen

Coeditores Maria Brockhaus  
William D. Sunderlin  
Louis V. Verchot

Asistente editorial Therese Dokken

Traducción Green Ink Ltd

© 2013 Center for International Forestry Research.  
Todos los derechos reservados.

Impreso en Indonesia  
ISBN: 978-602-1504-03-1

Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. y Verchot, L.V. (eds) 2013 Análisis de REDD+: Retos y opciones. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Traducción de: Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L.V. (eds) 2012 Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Fotografías:

Portada © Cyril Ruoso/Minden Pictures

Partes: 1. Habtemariam Kassa, 2. Manuel Boissière, 3. Douglas Sheil

Capítulos: 1. and 10. Yayan Indriatmoko, 2. Neil Palmer/CIAT, 3. and 12. Yves Laumonier, 4. Brian Belcher, 5. Tony Cunningham, 6. and 16. Agung Prasetyo, 7. Michael Padmanaba, 8. Anne M. Larson, 9. Amy Duchelle, 11. Meyrisia Lidwina, 13. Jolien Schure, 14. César Sabogal, 15. Ryan Woo, 17. Edith Abilogo, 18. Ramadian Bachtiar

Diseñado por el Equipo Multimedia de CIFOR, Grupo de Servicios de Información  
Traducción: Green Ink Ltd ([www.greenink.co.uk](http://www.greenink.co.uk))

CIFOR  
Jl. CIFOR, Situ Gede  
Bogor Barat 16115  
Indonesia

T +62 (251) 8622-622

F +62 (251) 8622-100

E [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)

[cifor.org](http://cifor.org)  
[ForestsClimateChange.org](http://ForestsClimateChange.org)

Cualquier opinión vertida en este documento es de los autores. No refleja necesariamente las opiniones de CIFOR, de las instituciones para las que los autores trabajan o de los financiadores.

#### **Center for International Forestry Research**

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un centro de investigación del Consorcio CGIAR. La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica.



## Financiación de REDD+

Charlotte Streck y Charlie Parker

- La financiación de REDD+ se encuentra ante un punto de inflexión: aunque hay financiación a corto plazo, los desembolsos son lentos y las oportunidades de inversión escasas; al mismo tiempo, no hay una estrategia adecuada y previsible a largo plazo para cubrir las necesidades de financiación de REDD+.
- A falta de unos objetivos ambiciosos para la mitigación del cambio climático, en un futuro previsible la financiación de REDD+ tendrá que provenir en su mayor parte del sector público. Durante esta fase transitoria, en que la financiación de REDD+ seguramente será fragmentada y se canalizará a través de varias agencias, será importante probar una diversidad de opciones de financiación que movilicen fondos del sector privado y aborden directamente los factores de la deforestación.
- Los países que adoptan el mecanismo de REDD+ más ricos con instituciones más fuertes podrían optar por financiar por sí mismos una parte significativa de REDD+. También podrían optar por firmar acuerdos en función de resultados con donantes y agencias internacionales. Los Estados más frágiles probablemente dependerán de financiación como la ayuda oficial al desarrollo (AOD) que combina la ayuda financiera con asistencia técnica y apoyo en materia de políticas.

## 7.1 Introducción

La reducción de emisiones de la deforestación tiene un precio, porque la protección de los bosques significa que no se percibirán ingresos de la madera, los cultivos o el ganado. Sin mecanismos legales y económicos que obliguen a propietarios y usuarios a actuar y que les compensen por ello, los bosques seguirán teniendo más valor muertos que vivos. El nuevo marco de incentivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques (y el rol de la conservación, el manejo sostenible y la mejora de los bosques), conocido como REDD+, busca promover el desarrollo y el crecimiento económico sin destruir unos recursos naturales valiosos. En el contexto de REDD+, los países han acordado “proponerse colectivamente el objetivo de frenar, detener y revertir la pérdida de cobertura forestal y de carbono”, y a hacerlo “en el contexto del suministro de un apoyo adecuado y previsible a las Partes que son países en desarrollo” (CMNUCC 2011a). Dentro de los países, los que sufren pérdidas económicas (antiguos usuarios y beneficiarios de los bosques) y los actuales protectores o guardianes de los bosques pueden verse compensados por sus pérdidas o recibir un premio por sus actuaciones. Los pagos pueden provenir de fuentes internacionales o nacionales, y se canalizarán a través de instituciones nacionales. Otra opción sería que los fondos privados llegasen directamente a los beneficiarios a través de mecanismos de mercado.

Para reflejar el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, la asignación de costos por la implementación de REDD+ ha sido una parte integral de las negociaciones sobre REDD+ que tuvieron lugar en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La financiación aparece de forma implícita en el contexto de aspectos técnicos como medición y niveles de referencia debatidos por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico (OSACT/SBSTA); o, de manera explícita, en el contexto de las negociaciones financieras realizadas en el seno del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo. En diciembre de 2011, en el 17º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP 17), las partes convinieron en que “la financiación basada en resultados proporcionada a los países en desarrollo que sea nueva, adicional y previsible podrá proceder de una gran variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, con inclusión de fuentes alternativas” y que podrían elaborarse “enfoques de mercado apropiados [...] para apoyar medidas basadas en los resultados de las Partes que son países en desarrollo” (CMNUCC 2012). Las Partes adoptaron, asimismo, directrices sobre los niveles de referencia para dar cuenta de las reducciones en emisiones que resulten de las actividades de REDD+. Sin embargo, no está claro si esos niveles de referencia podrían ligarse a incentivos financieros “basados en los resultados” en el futuro, y en caso afirmativo, cómo (ver también el Capítulo 16).

Hay cuatro retos principales relacionados con la financiación de REDD+:

- Definir los costos de REDD+ y estimar sus necesidades de financiación;
- Movilizar suficiente financiación nacional e internacional para cubrir los costos de las políticas y medidas de REDD+;
- Asignar y desembolsar la financiación para REDD+ de manera eficiente, efectiva y equitativa, para lograr resultados claros y medibles;
- Armonizar los requisitos y las necesidades de los responsables de la elaboración de políticas y otras partes interesadas de los países en desarrollo con los de los donantes u otros inversores en REDD+, y crear y/o fortalecer las instituciones necesarias para implementar las políticas y gestionar los fondos de REDD+.

Este Capítulo arroja luz sobre estos retos y examina sus implicaciones para la implementación de REDD+. El apartado 7.2 resume las maneras más habituales en que se calculan los costos de REDD+ y presenta las distintas estimaciones de costos que se han propuesto hasta la fecha para reducir de forma significativa las emisiones relacionadas con los bosques en los países en desarrollo. En el apartado 7.3 se debaten las diversas opciones disponibles para movilizar la financiación de REDD+ a corto y largo plazo. El apartado 7.4 describe los retos para el desembolso de fondos desde la perspectiva de países REDD+ y de donantes. El Capítulo concluye con un análisis de las distintas opciones institucionales y de políticas que pueden ayudar a superar los retos actuales y futuros en relación con la financiación.

## 7.2 Costos de REDD+

### 7.2.1 Estimación de los costos de REDD+

La mayoría de las estimaciones de costos de REDD+ utilizan un enfoque de costos de oportunidad (ver, por ejemplo, Kindermann *et al.* 2006; Blaser y Robledo 2007; Kindermann *et al.* 2008; Simula 2010). Expertos y asesores gubernamentales han propuesto enfoques alternativos (por ejemplo, República de Guyana 2008; PNUD y Presidente de Ecuador 2011). Los costos de oportunidad son los ingresos no percibidos al no hacer el mejor uso alternativo de la tierra. Las tierras forestales de ubicaciones diversas tienen distinta productividad y un contenido de carbono también diferente. En estos análisis se calculan los costos marginales de la protección de los bosques para determinar qué área de bosque puede protegerse a un determinado nivel de precio del carbono. Estos modelos no reflejan necesariamente los incentivos que se precisan para que el país alcance un objetivo concreto de reducción de emisiones (IWG-IFR 2009), ni tampoco tienen en cuenta el contexto político de la toma de decisiones. En algunos casos (por ejemplo, cuando es necesario llevar a cabo reformas estructurales caras), los costos de REDD+ para la sociedad podrían ser mucho mayores de lo calculado, pero en otras situaciones

podrían ser más bajos, por ejemplo cuando REDD+ puede implementarse mediante aplicación de la ley y medidas de “mando y control” que benefician a la sociedad (White y Minang 2011). En la mayoría de los casos, las políticas que producen beneficios de REDD+ también persiguen otros objetivos, a veces primarios, como son la reforma de la agricultura o la tenencia de la tierra. En tales casos, es difícil distribuir los costos entre los distintos objetivos.

Un enfoque alternativo es estimar los costos presupuestarios de REDD+, lo cual abarca valorar los costos de implementación de políticas y medidas, y las reformas institucionales que necesita cada país. No obstante, este enfoque no hace sino desviar el problema a otro nivel, concretamente el de expresar los costos y beneficios de las políticas públicas en términos susceptibles de comparación (Heinzerling y Ackerman 2002). Para poder comparar, en todo análisis de costos se tendría que cuantificar cada valor para la sociedad de una determinada política que redunde en un bien público (es decir, infraestructura sólida, buena gobernabilidad o protección ambiental). Es muy difícil capturar y poner precio a los elementos irrepetibles de un bosque, como son la irreversibilidad de la pérdida de su condición primaria y sus valores no monetarios como el ocio, el disfrute y la belleza (Ostrom y Ostrom 1977).

Así pues, aunque las evaluaciones de costos pueden informar las políticas de REDD+, son deficientes en algunos aspectos significativos. Las presunciones en que se basan no capturan en su totalidad los costos y beneficios de proteger la riqueza forestal de un país, y pueden infravalorar o sobrevalorar los costos, dependiendo del contexto de la política. En muchos casos, y especialmente cuando han sido propuestos por gobiernos nacionales u otras partes interesadas, las estimaciones de costo son más bien resultado de lo que se desea encontrar que del análisis racional (ver el Recuadro 7.1).

## 7.2.2 Estimaciones del costo global

El Informe Eliasch estimó que los costos globales de REDD+ ascenderían a entre 17 000 y 33 000 millones de dólares anuales, si se calcula una reducción del 50 % en las emisiones de los bosques para 2020 (Eliasch 2008). Kindermann *et al.* (2008) calcularon costos de entre 13 000 y 21 000 millones de euros anuales,<sup>1</sup> mientras que la Comisión Europea situó el costo anual en una cantidad de entre 15 000 y 25 000 millones de euros (CE 2008; ONFI 2008). Estos estudios estiman el potencial total de reducción económica que podría derivarse de actividades REDD+, partiendo de un determinado precio por tonelada de dióxido de carbono y un determinado costo relacionado con la conversión en el uso de la tierra. La cifra del potencial de reducción real, sin embargo, seguramente será menor, por las diversas limitaciones en la generación de reducción de emisiones a través de REDD+. Por tanto, las estimaciones del

<sup>1</sup> En abril de 2012, 1 euro = 1,32 dólares

## Recuadro 7.1 “¿Cuánto cuesta REDD+?": una pregunta (casi) sin sentido

Arild Angelsen

¿Cuál es el costo de REDD+? Al menos desde que se publicó el influyente Informe Stern en 2006, muchos han argumentado que REDD+ es una de las alternativas más baratas que existen para mitigar el cambio climático. Otros consideran que el mecanismo de REDD+ es una iniciativa costosa de resultados imprevisibles, tanto para el clima como para las personas de los bosques, así que, ¿quién tiene razón?

Preguntar cuánto cuesta REDD+ es casi tan impreciso como preguntar cuánto cuestan los coches. Todo depende del tipo de coche, de cuántos coches, de si se incluye el costo de fabricación, compra y funcionamiento, y así sucesivamente. La mayoría de las estimaciones de costos de REDD+ –incluidas las contenidas en el Informe Stern– se centran en costos de oportunidad, que se refieren al beneficio que se ha perdido por no haber hecho el mejor uso alternativo de la tierra, es decir, el dinero que no se ha percibido porque no se han conservado las tierras forestales. Un país que implementa REDD+ tiene que afrontar también gastos de transacción e implementación: por ejemplo, los costos de crear un sistema de REDD+ y de implementar las políticas necesarias para alcanzar los objetivos. Por tanto, la suma de costos de oportunidad, costos de implementación (salvo los que compensan directamente los costos de oportunidad) y costos de transacción (para gobiernos y usuarios de los bosques) proporciona una estimación del costo total para el país de la deforestación y la degradación evitadas.

Pero los gobiernos de países REDD+ podrían interesarse igualmente en una variante de esta pregunta: ¿cuáles son los costos presupuestarios de REDD+? Los costos de oportunidad pueden no ser un buen indicador de estos últimos, pues dependen de las políticas adoptadas y de su efectividad. Solo hay un caso especial en que los costos presupuestarios serían idénticos a los costos de oportunidad: en concreto, el sistema hipotéticamente “perfecto” de los pagos por servicios ambientales (PSA), que implica costos de transacción cero y una orientación únicamente hacia aquellos usuarios de los bosques que piensan talarlos en los próximos años, y que requiere información completa sobre los costos de oportunidad de estos usuarios. Está claro que estos supuestos son totalmente irrealistas; además, en la práctica el costo de un sistema de PSA sería mucho mayor, incluso si la tenencia de la tierra y otros requisitos previos lo permitieran.

Hay otras muchas políticas de REDD+ que se podrían aplicar. Los gobiernos pueden dejar de conceder licencias para la conversión de los bosques, crear áreas de bosque protegidas y mejorar el cumplimiento de la legislación y la reglamentación forestal, sin compensación para los usuarios de los bosques

[...continúa en la página siguiente]

**[Recuadro 7.1 (cont.)]**

actuales o futuros. En tales casos, los costos presupuestarios podrían ser más bajos que los costos de oportunidad. También podrían reducir los beneficios que genera la ocupación por tierras agrícolas mediante la eliminación de subvenciones estatales, lo que supondría un ahorro en los presupuestos públicos. Otras políticas agrícolas, como la intensificación de la agricultura, pueden tener costos superiores a los costos de oportunidad, pero podrían quizás servir para alcanzar objetivos adicionales, como una mejora de la producción y de la seguridad alimentaria.

Por tanto, la pregunta “¿cuánto cuesta REDD+?” tendrá que concretizarse más, y habrá que situarla en su contexto antes de poder darle respuesta. Dependerá, primero, de los costos de que se trate: costos para la sociedad en su conjunto, o para el gobierno, los usuarios locales de los bosques o los que comercian en productos básicos. En segundo lugar, dependerá de la combinación de instrumentos de políticas que se utilicen para la implementación de REDD+ y de su efectividad. Y por último, dependerá de la cuantía que se busque en la reducción de emisiones y la rapidez con que haya de lograrse.

**Cuadro 7.1 Oferta mundial de reducción en emisiones de REDD+ (GtCO<sub>2</sub>e anuales) (Meridian Institute 2009)**

	Deforestación evitada (RED)	REDD+
Sin precio especificado	-	3,5–4,9 (Grieg-Gran 2008)
<10 USD/tCO <sub>2</sub> e	1,8 (Murray <i>et al.</i> 2009)	2,7 (McKinsey & Company 2009) [3,6 <sup>a</sup> ]
<20 USD/tCO <sub>2</sub> e	2,5 (Murray <i>et al.</i> 2009) 1,6–4,3 (Kindermann <i>et al.</i> 2008)	4,3 (McKinsey & Company 2009) [5,2 <sup>a</sup> ]
<30 USD/tCO <sub>2</sub> e	2,8 (Kindermann <i>et al.</i> 2008) 2,8 (Sohngen 2009) 2,9 (Murray <i>et al.</i> 2009)	4,6 (Sohngen 2009) - -
> 100 USD/tCO <sub>2</sub> e o potencial	4,5 (Tavoni <i>et al.</i> 2007) 3,1–4,7 (Kindermann <i>et al.</i> 2008)	7,2 (Tavoni <i>et al.</i> 2007) 7,8 (McKinsey & Company 2009)*

a Incluye reducción de emisiones en turberas



costo global muestran el potencial máximo de los bosques y otras actividades de uso de la tierra para eliminar o absorber GEI a un determinado precio, más que el potencial realista de reducciones en las emisiones a corto y mediano plazo (Lubowski 2008). Para ilustrar el potencial de reducción de las emisiones de REDD+, el Cuadro 7.1 muestra la oferta mundial estimada de reducción de emisiones como consecuencia de una menor deforestación según distintos escenarios de precios.

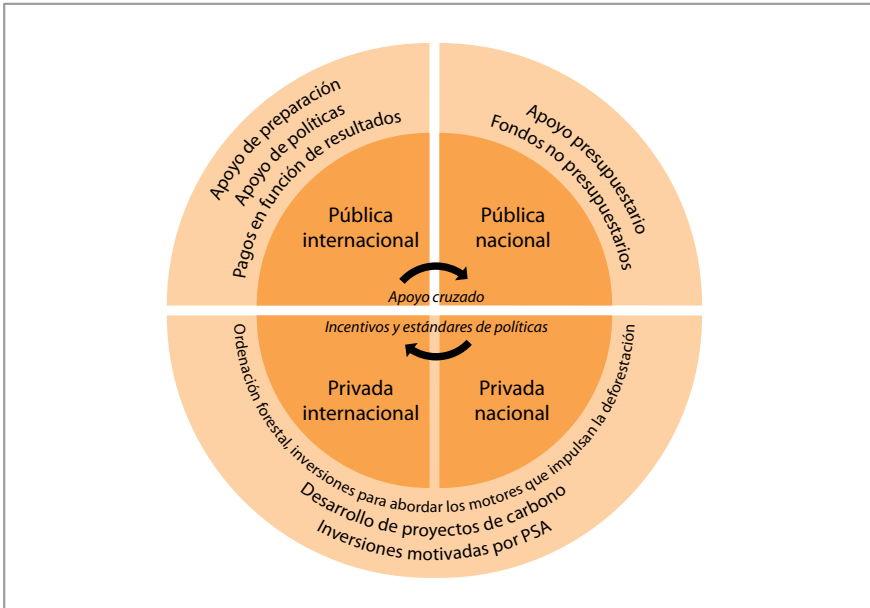
A nivel de país, los costos de REDD+ dependen del contenido de carbono de los bosques, así como también de cuál es el motor de la deforestación a nivel local. Por ejemplo, el costo de oportunidad más elevado de REDD+ en Indonesia se produce cuando la conservación de los bosques compete con la producción de aceite de palma. En este caso, los costos de oportunidad oscilan desde los 0,49 dólares por tonelada de CO<sub>2</sub>e para la pequeña agricultura de Sumatra, hasta los 19,6 dólares por tonelada de CO<sub>2</sub>e para la conversión de tierra forestal degradada en tierras para el cultivo de aceite de palma (Olsen y Bishop 2009). Entretanto, Nepstad *et al.* (2007) calcularon que la eliminación total de la deforestación en la Amazonia brasileña costaría 1,49 dólares por tonelada de CO<sub>2</sub>e, pero que la reducción de la deforestación hasta el 94 % de los niveles previstos costaría tan solo la mitad de esa cantidad (0,76 dólares por tonelada de CO<sub>2</sub>e).

## 7.3 Movilización de fondos para REDD+

### 7.3.1 Fuentes actuales de financiación para REDD+

En la actualidad, la financiación de REDD+ proviene de varias fuentes –públicas, privadas, nacionales e internacionales– y de diversos mecanismos (como impuestos, mercados de carbono y subasta de créditos). La financiación del sector público se define aquí como ingresos generados a través de un mecanismo controlado por un organismo público, mientras que la financiación del sector privado no pasa por el sector público. Utilizando estas definiciones, surgen cuatro categorías de financiación para REDD+ (ver la Figura 7.1). La financiación pública internacional representa hoy una cifra cercana a los 3000 millones de dólares anuales, que abarca los compromisos realizados en el contexto de la CMNUCC y fondos de otros canales, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Convención sobre Diversidad Biológica (Parker *et al.* 2012). Estos fondos se están desembolsando principalmente a través de canales bilaterales y multilaterales como ayudas y préstamos, y en contadas ocasiones como pagos en función del desempeño.

Dos terceras partes de todas las actividades de REDD+ que reciben apoyo internacional son financiadas actualmente a través de programas y proyectos bilaterales de país; el resto proviene de fuentes multilaterales (Simula 2010; PWC 2011). Aquí se incluyen programas de preparación y, en menor medida,



**Figura 7.1 Fuentes de financiación de REDD+**

apoyo en materia de políticas y proyectos piloto de pagos en función de resultados. A nivel de país, Noruega es el principal donante de REDD+. En la COP 13 celebrada en 2007 el Gobierno de Noruega presentó su Iniciativa Internacional de Clima y Bosques, con la cual prometió aportar 15 000 millones de coronas noruegas (2600 millones de dólares) en cinco años. Desde entonces, Noruega ha firmado acuerdos bilaterales con Brasil, Guyana, Indonesia, México y Tanzania, y ha contribuido a diversos fondos multilaterales. En sus acuerdos bilaterales con Brasil, Guyana e Indonesia, Noruega ha adoptado un enfoque de REDD+ de “pagos en función del desempeño”. Otros donantes de importancia incluyen Australia, Francia, la Comisión Europea, Alemania, Japón, Reino Unido y EEUU. Hasta la fecha, estos donantes han prestado apoyo principalmente a programas de preparación, elaboración de políticas y proyectos piloto. Hasta hoy, ningún otro país ha firmado acuerdos sobre la base de pagos en función del desempeño como ha hecho Noruega.

Aún se carece de datos sobre financiación nacional o interna para REDD+, porque los países en desarrollo no tienen un sistema muy coherente de informes sobre la asignación de fondos para REDD+. No obstante, parece claro que la financiación interna es significativa, sobre todo en economías emergentes y de ingresos medios, en las que supera las aportaciones internacionales para REDD+. Brasil informa de una media anual histórica de 500 millones de dólares para labores de monitoreo e inventario, aplicación de la ley y reforma de la tenencia, así como para los planes nacionales y locales de reducción de la deforestación. México gasta una suma parecida (460 millones

de dólares) cada año en una serie de proyectos que incluyen su programa de forestación ProÁrbol, subvenciones verdes, actividades de demostración y sistemas de medición. Indonesia afirma haber dedicado 1500 millones de dólares a la protección de bosques y la rehabilitación de tierras degradadas, entre otras actividades de protección de los bosques (PWC 2011). Entretanto, China ha aportado unos 7000 millones de dólares anuales a actividades de forestación para la protección de cuencas hidrográficas y otros “mecanismos de ecocompensación” en una serie de programas con mediación gubernamental, que incluye el programa “Grano por Verde” (Parker *et al.* 2012).

Se espera que en el futuro el sector privado proporcione una parte significativa de la financiación de REDD+. Sin embargo el entorno normativo de hoy aporta escasos incentivos para la inversión del sector privado en REDD+. Hay una serie de factores, entre otros la responsabilidad social corporativa y el requisito de cumplimiento previo, que ya están motivando algunas inversiones en los mercados voluntarios de carbono (inversiones que sumaron unos 140 millones de dólares en 2010) (Diaz *et al.* 2011). Los mecanismos de mercado indirectos, como la certificación de cacao, café, madera, aceite de palma y soja, que buscan combatir los factores que generan la deforestación, también suponen una fuente expandible de financiación para REDD+ por parte del sector privado. Estos mecanismos generan, a día de hoy, primas superiores a los 1000 millones de dólares anuales para la conservación de los bosques en los países en desarrollo.

### 7.3.2 Escala de la financiación futura para REDD+

Las estimaciones en torno a la escala de financiación de REDD+ que se precisará en el futuro oscilan enormemente, y dependen en gran medida de las fuentes de financiación que se contemplan. En las categorías de financiación pública y privada antes descritas, la financiación de REDD+ puede dividirse en cuatro grupos principales: inversiones privadas *directas e indirectas*, y financiación pública *de mercado y no de mercado* (ver la Figura 7.2). Será necesario emplear distintos métodos y herramientas diversas para ampliar la financiación de cada una de estas fuentes.

Los mecanismos **directos de mercado** son fuentes de financiación del sector privado que generan ingresos directamente por las reducciones en las emisiones e incluyen los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento. Estos mecanismos pueden generar financiación a través de la reglamentación y una mayor demanda de créditos de carbono forestal, así como otros servicios forestales directos (como la compensación por biodiversidad). La cuantía de fondos disponible dependerá del número de países que puedan participar en tales mecanismos, la ambición de los objetivos fijados, las condiciones para la aceptación de créditos de carbono y otros factores que generan demanda de servicios ecosistémicos de los bosques.



**Figura 7.2 Financiación de REDD+ por parte del sector público y privado**

Adaptado de Parker *et al.* (2009a) y Parker *et al.* (2012)

Los mecanismos **indirectos de mercado** obtienen financiación vinculando el valor de la conservación de los bosques a los mercados tradicionales como los del café, la soja y la carne de vacuno. Si se reduce la “huella forestal” de estos mercados asociados, se puede obtener financiación para reducir la deforestación, pero no necesariamente a cambio de una reducción de las emisiones (por ejemplo, los mercados sostenibles de café o las mesas redondas de los productos básicos). Los mecanismos indirectos de mercado pueden ampliarse a escala si se introduce reglamentación sobre productos básicos “verdes” en el lado de la demanda. Por ejemplo, si hubiese en la UE o en China (los mayores importadores de soja a nivel mundial) legislación que exigiera la producción sostenible de soja, esto contribuiría en gran medida a lograr una soja con “deforestación cero”.

Los mecanismos **vinculados al mercado** y **no vinculados al mercado** son dos modalidades de financiación del sector público. Aunque la financiación provendrá de una diversidad de entidades públicas y privadas (por ejemplo, a través de impuestos y otras tasas), el total lo agrega y lo distribuye una institución del sector público. Los mecanismos **de mercado** generan financiación de mercados que no tienen ninguna vinculación con los bosques (por ejemplo, la subasta de permisos de emisiones o el impuesto sobre transacciones financieras). La escala de la financiación obtenida a través de estos mecanismos dependerá de la coordinación política de agendas que compiten entre sí. Por ejemplo, en la actualidad se aboga porque los

ingresos generados por el impuesto sobre transacciones financieras tengan una diversidad de potenciales destinos, todos ellos causas igualmente justas, como la reducción de la pobreza, la conservación de la biodiversidad y la estabilización de las economías regionales. La coordinación política de estas agendas diversas ayudará a garantizar que se puedan beneficiar colectivamente de estas fuentes de ingresos.

Por último, la categoría de mecanismos que **no son de mercado** captura las formas “tradicionales” de financiación pública, como son la ayuda oficial al desarrollo y el gasto público nacional asignado en los presupuestos de cada país. Como tales mecanismos son impulsados exclusivamente por los gobiernos, la cuantía de financiación generada dependerá principalmente de la fuerza de la voluntad política y la agenda de conservación forestal de cada país. Incluso cuando existe reglamentación internacional (por ejemplo, el Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo), no hay garantía alguna de que los compromisos adquiridos se vayan a cumplir.

El Cuadro 7.2 resume los mecanismos más importantes para la movilización de recursos para la financiación de REDD+. La mayoría pueden aplicarse a nivel nacional e internacional. La escala de la financiación lograda a través de cualquiera de estos mecanismos dependerá del grado en que REDD+, así como la conservación de los bosques en un sentido más general, cuenten con un mandato político suficientemente convincente en países desarrollados y países en desarrollo.

A corto y mediano plazo (hasta 2020), los mecanismos del sector público son la mayor fuente potencial de financiación para REDD+, con una cantidad adicional de 9000 millones de dólares anuales de mecanismos que no son de mercado y quizás otros 7000 millones de dólares procedentes de los mecanismos de mercado. La mayor parte provendrá, seguramente, de los gobiernos nacionales de países en desarrollo. Aunque los mecanismos de mercado tendrían la capacidad de generar fondos significativos para REDD+, siguen sin prodigarse como fuentes de esta financiación. A excepción de la subasta de permisos de emisión, estos mecanismos tienden a ser inviables políticamente porque quedan fuera del mandato de los responsables de REDD+.

El sector privado podría convertirse en fuente importante de financiación para REDD+, con la capacidad para contribuir 13 000 millones de dólares más cada año para 2020. Hace mucho ya que se viene proponiendo a los mercados de carbono como estrategia para movilizar financiación privada y lograr REDD+. Utilizando las estimaciones del Cuadro 7.1 sobre el potencial de reducción (calculado a un precio de carbono de 25 dólares/tCO<sub>2</sub>), los mercados de carbono tendrían que aportar 7500 millones de dólares para 2020. Angelsen *et al.* (2012) constataron que, si se permite la comercialización

**Cuadro 7.2 Niveles actuales (2010) y futuros (2020) de financiación de REDD+ de mecanismos del sector público y el sector privado (en miles de millones de USD anuales)**

Sector	Mercado	Escala	Actuales (2010)	Futuros (2020)
Privado	Directo	Mercado de cumplimiento	-	7,5 <sup>a</sup>
		Mercado voluntario	0,14 <sup>b</sup>	0,6
	Indirecto	Productos básicos “verdes”	1 <sup>c</sup>	5 <sup>d</sup>
<b>Total privado</b>			<b>1,1</b>	<b>13,1</b>
Público	De mercado y otros	Subasta de permisos	0,04	1,5 <sup>e</sup>
		Tasa o arancel marítimo	-	1,7
		Impuesto sobre transacciones financieras	-	3,8 <sup>f</sup>
		Arancel sobre primas de seguros	-	1,7 <sup>g</sup>
	No de mercado	Gasto público interno	10 <sup>h</sup>	13 <sup>i</sup>
		Ayuda oficial al desarrollo	4,4 <sup>j</sup>	10 <sup>g</sup>
		Canjes de tipo “deuda por naturaleza”	0,02	0,36 <sup>k</sup>
<b>Total público</b>			<b>14,5</b>	<b>32,1</b>

Notas: Cuadro adaptado de Parker *et al.* (2009a) y Parker *et al.* (2012) a) suponiendo que surge un mercado de carbono forestal y un suministro global de 3 GtCO<sub>2</sub> a 25 USD/tCO<sub>2</sub>; b) Diaz *et al.* (2011); c) 300 millones USD de madera certificada y 700 millones USD equivalente al 30 % de todos los productos básicos “verdes”; d) sobre la base de un crecimiento sostenido del 15 al 20 % en el mercado, en los países en desarrollo; e) 40 % de posibles ingresos por subastas relativas a actividades climáticas, 50 % en países en desarrollo, 28 % sobre la base del ecosistema; f) presunción del valor menor: 5% del impuesto sobre transacciones financieras en toda la UE va destinado a REDD+; g) sobre la base del crecimiento sostenido del 3 % anual en el presupuesto de ayuda, el 5 % del cual va destinado a la protección de los bosques; h) incluye compromisos recientes según lo acordado en la base de datos voluntaria REDD+ de la Asociación REDD+, ver <http://reddplusdatabase.org/>; i) sobre la base de los aumentos previstos en la financiación de áreas protegidas; j) tomado de la base de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [www.oecd.org/dac/stats/rioconventions](http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions); k) sobre la base de un crecimiento anual sostenido del 30 %.

de créditos de REDD+ en los mercados globales de carbono, las emisiones de la deforestación se reducirían entre un 22 y un 62 % en comparación con el escenario habitual (es decir, entre un 42 y un 71 % si se compara con los niveles de 2005), dependiendo del contexto. Sin embargo, la creación de mercados efectivos de carbono depende de que se acepten las compensaciones de REDD+ en los mercados globales de carbono.

No obstante, de momento no hay un mercado global de carbono, ni tampoco hay un sistema global en evolución. Puesto que el poder legislativo en EEUU no tiene previsto regular cuestiones del clima, y la UE únicamente está

dispuesta a estudiar la vinculación de su sistema de comercio de emisiones con REDD+ después de 2020, los mercados de carbono no son una fuente segura a corto plazo. Además, para vincular REDD+ a los mercados de carbono será necesaria una evaluación cautelosa que se apoye en marcos de créditos REDD+ probados, junto con salvaguardas y la regulación de la oferta y la demanda. A falta de instrumentos de financiación específicos para REDD+, las estrategias encaminadas a lograr la estabilidad financiera de REDD+ a largo plazo se están decantando más bien por los incentivos a la inversión a nivel nacional (y regional).

La otra fuente clave de financiación del sector privado para REDD+ sería mediante mecanismos de mercado indirectos. Con los escasos datos de que se dispone es difícil estimar la escala de la financiación que se podría generar a través de productos básicos “verdes”. No obstante, los cálculos más conservadores sobre crecimiento de los productos certificados a través de iniciativas, como las mesas redondas para la producción responsable de soja, aceite de palma y azúcar, parecen indicar que los mecanismos de mercado indirectos podrían generar 5000 millones de dólares más cada año.

## **7.4 Ejecución de la financiación de REDD+**

### **7.4.1 Asignación de fondos**

La movilización de fondos de REDD+ está estrechamente ligada a su asignación y gasto. La asignación se refiere a la distribución de la financiación de REDD+ entre países, así como entre políticas, estrategias y programas pertinentes de un determinado país. Algunos mecanismos de movilización de recursos ya incluyen preferencias para la asignación concreta de los fondos. La experiencia con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) demuestra que los mercados de carbono canalizan la mayor parte de los fondos a países con un clima de inversiones favorable caracterizados por un sistema judicial y una administración pública que funcionan bien, y por tener tasas de emisión elevadas. Las inversiones hechas a través de mecanismos de mercado de carbono que se destinan directamente a los proyectos, además, favorecen a zonas con altas tasas de deforestación, bosques con alto contenido en carbono y motores de deforestación locales fáciles de identificar, en los que las fugas y la permanencia pueden ser monitoreadas y gestionadas dentro del propio contexto del proyecto. La experiencia con sistemas nacionales que dependen de pagos por servicios ecosistémicos muestra, asimismo, que la titularidad y propiedad clara de la tierra son condiciones adicionales para estimular la inversión en programas de forestación o conservación.

Los donantes bilaterales suelen preferir realizar pagos a países socios preseleccionados. Los flujos de financiación de REDD+ que llegan a fondos o presupuestos de gestión pública deben luego asignarse a los sectores que

trabajan para contrarrestar la pérdida de carbono forestal. Esta asignación suele registrarse por una lista de actividades prioritarias a nivel nacional que reflejan el potencial y el costo de la reducción de emisiones, el grado de aceptabilidad y compromiso político, y los insumos de las partes interesadas. Los presupuestos pueden servir para crear un entorno favorecedor, caracterizado por la participación en la planificación integrada del uso de la tierra, la clarificación de la titularidad sobre la tierra y los derechos de propiedad, el fortalecimiento de instituciones y la creación de capacidades. Estas actividades tienen finalidades múltiples, suponen compromisos a largo plazo y abordan los motores subyacentes (más que los motores directos) de la deforestación. Aunque es posible que estos procesos puedan verse respaldados por fuentes de AOD, la financiación climática internacional específica probablemente tenderá a apoyar acciones más directas para frenar los motores de la deforestación. Este proceso podría abarcar la inversión en agricultura para aumentar la productividad, la financiación de soluciones alternativas de infraestructuras, y la creación de fuentes alternativas de ingresos para las comunidades locales.

A día de hoy, la mayor parte de la financiación de REDD+ va a parar a Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia (Asociación REDD+ 2011). Estos países representan una parte considerable de las tres cuencas de bosques tropicales más importantes (las de la Amazonia, la cuenca del Congo y el sudeste asiático), y son responsables de más de la mitad del total de emisiones relacionadas con los bosques. La asignación de fondos a estos países refleja su potencial para la reducción de emisiones, aunque no necesariamente un mayor estado de preparación que en países más pequeños pero más participativos. La decisión de Noruega de firmar una colaboración estratégica con Guyana, por ejemplo, es una forma de premiar el compromiso político de un pequeño estado forestal con bajas emisiones.

## 7.4.2 Desembolso de los fondos de REDD+

El desembolso de la financiación de REDD+ utiliza fondos nacionales e internacionales, programas bilaterales e incentivos directos del sector privado para canalizar la financiación de REDD+ a los países<sup>2</sup> y a los beneficiarios finales en cada país.

Los fondos regionales e internacionales son administrados por organizaciones financieras multilaterales, como por ejemplo el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el programa ONU-REDD+, y el Fondo de la Cuenca del Congo. Dado que el proceso para hacer llegar la financiación de REDD+ a los actores nacionales es largo, la asignación de fondos a los programas internacionales es una opción muy atractiva para los donantes,

---

2 Ver, por ejemplo, la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la creación de Fondos Nacionales para el Clima (PNUD 2011).



aunque luego pueda haber una demora significativa en la utilización de esos fondos. En una evaluación del FCPF, el 67 % de las partes entrevistadas se mostraron disconformes con la afirmación de que los fondos se desembolsaron de manera puntual (NORDECO 2011).

El desembolso de fondos a través de agencias bilaterales (por ejemplo la Agence française du développement, el Kreditanstalt für Wiederaufbau alemán, y USAID) puede ser menos estratégico que el apoyo a programas nuevos y específicos de REDD+, pero puede resultar más rápido, sobre todo cuando la financiación se desembolsa a través de programas, acuerdos institucionales y mecanismos de evaluación ya existentes. La colaboración de Noruega con Indonesia demuestra que la innovación en gobernabilidad y en mecanismos de desembolso exige plazos largos, algo que a veces se subestima. Incluso cuando los países administran los fondos a través de instituciones locales profesionales ya probadas, como sucede con el Fondo Amazonia, la novedad que supone REDD+ y su necesidad de actores nuevos y de mediciones del desempeño también novedosas probablemente provocará retrasos y causará frustración en cuanto a expectativas (aunque esa frustración será menor si los actores están acostumbrados a unos ciclos de desembolso lentos, como sucede ya con algunos programas ambientales como el FMAM).

Otras barreras para el flujo de la financiación son la ineficiencia en las organizaciones intermediarias, la falta de capacidad de absorción de los fondos y las dificultades iniciales, por lo demás normales en un periodo de aprendizaje (Proyecto de Bosques Tropicales del Príncipe Carlos 2011). Si se tiene en cuenta el grado de apoyo político y el apoyo por parte de las personas interesadas que se precisa para implementar REDD+ con éxito, muchas veces se ha subestimado el tiempo que requieren las consultas y la creación de un consenso. Si a esto se añaden largas cadenas burocráticas y la falta de programas de REDD+ que estén en situación de recibir inversiones, estas demoras significan que el desembolso de financiación internacional para REDD+ ha quedado muy a la zaga de los compromisos adquiridos.

Por otra parte, hay pruebas claras de que lo que se ha aprendido de los esfuerzos por mejorar la efectividad de la ayuda al desarrollo no está siendo transferido a la financiación climática en general, ni concretamente a la financiación de REDD+. Al mismo tiempo, la base en proyectos y la naturaleza específica de los mecanismos financieros de REDD+ significan que los países tienen que crear sistemas especiales de administración en lugar de utilizar los sistemas nacionales ya existentes.

En resumen, es evidente que tanto los países receptores como los donantes se beneficiarían del desarrollo de estrategias de financiación de REDD+, de una coordinación más estrecha, del fortalecimiento institucional y de una mayor capacitación. Es preciso, sobre todo, responder ante las circunstancias

## Recuadro 7.2 Financiación de REDD+ en la República Democrática del Congo

André Aquino

El proceso de REDD+ en la RDC está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo a través de una unidad de coordinación nacional específica para REDD+, integrada por especialistas nacionales y extranjeros. La estrategia nacional de REDD+ sigue en fase de elaboración, por lo que aún no se conocen los costos totales de la consecución de REDD+. Casi la totalidad de la financiación de REDD+ proviene de donantes internacionales, y hasta el momento la participación del sector privado ha sido escasa, aunque hay un proyecto de agrosilvicultura del MDL, liderado por una empresa privada congoleña, que es una notable excepción.

Se calcula que las necesidades de preparación de REDD+ ascienden a 23 millones de dólares, financiadas principalmente por el FCPF y el Programa ONU-REDD+. El Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (CBFF) proporcionará unos 35 millones de dólares para una serie de proyectos piloto de REDD+, mientras que el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, aportará 60 millones de dólares para financiar inversiones de REDD+ en tres grandes ciudades congoleñas (Kinshasa, Kisangani y Mbuji Mayi-Kananga). Los pagos en función de resultados por la reducción de emisiones siguen siendo un objetivo para el futuro, pero el país ha mostrado interés en acceder al Fondo de Carbono del FCPF a través de un programa subnacional de REDD+.

Hay varios retos de consideración en relación con el desembolso de fondos. La coordinación general es costosa, por la multitud de fuentes de financiación y los distintos procedimientos fiduciarios y de informes exigidos por los distintos donantes. La incertidumbre a nivel global sobre la tramitación de la financiación para REDD+ al nivel nacional y la cuestión de cómo aplicar las salvaguardas han producido retrasos en los desembolsos. La deficiente capacidad de gestión fiduciaria a nivel nacional exacerba los retos. Hasta ahora la RDC ha tratado de resolver los retrasos en los desembolsos procurando que la unidad nacional de REDD+ disponga del mandato necesario para coordinar las distintas fuentes de financiación, delegue la gestión fiduciaria a una unidad fiduciaria ya existente en el Ministerio de Medio Ambiente y capacite a los empleados de importancia clave.

De cara al futuro, la RDC se propone crear un fondo nacional de REDD+ independiente, integrado en un mecanismo participativo de asignación de fondos y con capacidad institucional suficiente para proporcionar financiación nacional coherente con la estrategia nacional que se está elaborando. Se espera que los donantes internacionales aporten la mayor parte de la financiación. En un principio, esos fondos deberán ir

condicionados a reformas políticas, capacitación institucional e indicadores intermedios. Con el tiempo, a medida que vaya creciendo la capacidad institucional, el fondo podría evolucionar y convertirse en un programa de pago por reducción de emisiones verificable. Como complemento del fondo, la RDC permite que las transacciones de carbono se enfoquen hacia los distintos mercados (mercados voluntarios, emergentes y regulados), dentro de un marco institucional nacional para la regulación de las transacciones de carbono que incluye la creación de un registro nacional transparente.

nacionales, además de satisfacer los requisitos de los contribuyentes externos en cuanto a emplear de modo transparente y con rendición de cuentas la financiación de REDD+.

### 7.4.3 Rol de las instituciones nacionales

El éxito de REDD+ depende de la existencia de políticas e instituciones nacionales capaces de lograr reducciones de emisiones de REDD+ a gran escala de forma efectiva, eficiente y equitativa. Se necesita un canal efectivo para proporcionar capacidad de desembolso y capacidad de absorción, ambas cosas sustentadas por normas, salvaguardas y procesos que sean transparentes y sencillos a la vez que adecuados y flexibles según las necesidades y la escala local (Proyecto de Bosques Tropicales del Príncipe Carlos 2011).

Los mecanismos de desembolso nacional pueden ir ligados a reformas de la gobernabilidad general, medidas sectoriales y programas directos de incentivos fiscales. En el caso de reformas de la gobernabilidad, la financiación se utilizará principalmente para apoyar al sector público con la adición de capacidades y recursos. Las medidas sectoriales buscan abordar los motores de la pérdida de carbono forestal, e incluyen la eliminación de incentivos perversos y la introducción de planificación y salvaguardas. Estas medidas pueden también servir para definir incentivos fiscales directos, con los cuales determinados grupos reciben pagos por realizar ciertas actividades (por ejemplo, plantación, monitoreo y conservación de árboles) o dejar de hacer otras (por ejemplo, convertir la tierra y talar árboles).

A corto plazo, los intermediarios internacionales o bilaterales seguirán desempeñando un rol importante en el desembolso de fondos de preparación. No obstante, la financiación de REDD+ a largo plazo tendrá que ser asignada y desembolsada por instituciones nacionales. Aunque la ayuda financiera internacional puede ayudar a inducir cambios de políticas, es fundamental que las estrategias de REDD+ sean lideradas por los propios países, para que tengan en cuenta las necesidades y prioridades nacionales. Las instituciones nacionales son agentes fundamentales para la movilización y la distribución

**Cuadro 7.3 Resumen de necesidades de REDD+ (adaptado del Meridian Institute 2009)**

	Costos de preparación de REDD+		Costos de implementación de REDD+	
	Fase 1: costos de preparación e iniciales; y en curso, costos de capacitación y fortalecimiento institucional	Fase 2: políticas y medidas	Fase 3: pagos en función de resultados	
<b>Objetivos</b>	Permitir la participación en REDD+, evaluar las opciones de políticas, crear estrategias y lograr consenso  Crear y mantener la capacidad para implementar y monitorear con éxito las actividades de REDD+	Crear entornos favorecedores, mejorar la gobernabilidad y el manejo de los bosques, y abordar los motores de la deforestación mediante inversiones	Compensar las reducciones en las emisiones	
<b>Reducción en las emisiones</b>	Efecto directo escaso o nulo en las emisiones por el uso de la tierra	Efecto menos directo en las emisiones, quizás con algún retraso	Debe tener vinculación clara con la reducción en las emisiones	
<b>Necesidades de financiación</b>	Financiación inicial necesaria, probablemente no basada en los mercados	Utilización de una combinación de fondos.	Pago puede ser a posteriori  Financiación directa e indirecta de mercado	

de fondos, y deben cumplir con las normas fiduciarias reconocidas a nivel internacional. El Fondo Amazonia de Brasil es un ejemplo de fondo nacional que desempeña numerosas funciones financieras y técnicas que en otros casos quedarían a cargo de instituciones internacionales. Los países con instituciones más débiles tardarán más tiempo en reducir su dependencia de intermediarios internacionales como el Banco Mundial y la ONU, o de programas de ayuda bilaterales, para administrar y asignar los fondos de REDD+ (ver el Recuadro 7.2).

## 7.5 Conclusiones: vincular la financiación de REDD+ con políticas y programas

En 2009, en el Acuerdo de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a aportar un total de 3500 millones de dólares en financiación, del que se dispondría a corto plazo y se desembolsaría durante la

fase de preparación de REDD+ 2010–2012 (ver las fases de implementación y financiación de REDD+ en el Cuadro 7.3). Sin embargo, a finales de 2011 (cuando los compromisos adquiridos alcanzaban ya los 4170 millones de dólares), tan solo se había asignado y aprobado el desembolso a países y fondos concretos de un total de 446 millones de dólares (Nakhooda *et al.* 2011). Una gran parte de este dinero aún permanece en fondos fiduciarios internacionales, presupuestos nacionales y fondos de los países receptores, y es poco probable que sea desembolsado para finales de 2012. Por tanto, aunque los compromisos internacionales siguen estando muy por debajo de las estimaciones de costos, hay un grave problema a la hora de entregar los fondos que ya han sido prometidos.

El costo total de la reducción de las emisiones de la deforestación depende de los tipos de gastos que se tengan en cuenta y del tipo y efectividad de la combinación de políticas que se ha elegido. La gran mayoría de países, tanto desarrollados como en desarrollo, carecen de estrategias concretas sobre cómo implementar REDD+. Es muy difícil, por tanto, definir las necesidades de financiación de REDD+ a nivel global y nacional. No obstante, está claro que la movilización de fondos para REDD+ a largo plazo sigue siendo un tema sin resolver. Incluso los cálculos más conservadores con respecto a los costos relativos a la implementación de REDD+ superan con mucho los 4170 millones de dólares comprometidos como financiación de inicio rápido. El desarrollo de métodos y canales para el desembolso, la creación y el fortalecimiento de instituciones nacionales e internacionales, y la formulación de políticas y mecanismos de financiación sólidos serán, por tanto, medidas clave del progreso alcanzado en REDD+ a corto plazo, además de condición de su éxito a largo plazo.

A corto y mediano plazo (hasta el año 2020 como mínimo), la financiación de REDD+ procederá de fuentes múltiples regidas por una diversidad de normativas y dirigidas a actores distintos. Una gran parte de la financiación tendrá que provenir de los presupuestos públicos de países en desarrollo. La magnitud de esa financiación dependerá de que exista una voluntad política sostenida en los países desarrollados, del grado de ambición de los objetivos climáticos nacionales e internacionales y de la capacidad para adoptar mecanismos que movilicen financiación de nuevas fuentes. Los países en desarrollo más ricos seguirán financiando sus propios programas de REDD+. Los pagos para estados frágiles podrían estructurarse de manera que se creen incentivos para invertir en nuevas políticas y reformas cuyo objetivo sea conseguir transformaciones económicas y sociales de importancia crítica. Los incentivos deberán dirigirse a aquellos que probablemente responderán a estos estímulos, como pueden ser los agentes económicos que operan en el terreno: agricultores, comunidades y entidades privadas (Karsenty y Ongolo 2012). Es posible que para la generación de actividades de REDD+ a nivel

nacional y local se reciba apoyo adicional originado en las transacciones del mercado de carbono voluntario. El Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, iniciado por el estado de California, y los mercados de carbono regionales emergentes de Asia son ejemplos interesantes de iniciativas subnacionales.

En resumen, es poco probable que REDD+ pueda aportar financiación directa para reducciones rápidas y baratas de las emisiones, pero proporciona una oportunidad importante para que los países aborden las causas estructurales de la deforestación y comiencen un proceso de cambio transformador en que se tengan en cuenta los recursos forestales. En los casos en que se puede actuar sin apoyo internacional, es posible que los gobiernos prefieran pagos en función de resultados a escala nacional (Fase 3). Sin embargo, muchos países necesitarán apoyo tanto en el establecimiento de proyectos como en las reformas de políticas (Fase 2). En los próximos años, cuando la implementación de REDD+ se amplíe pero aún no haya un marco internacional de políticas legalmente vinculantes, la financiación deberá proceder de una diversidad de fuentes que participen directamente con el sector privado para combatir los motores de la deforestación.